

N/REF: 0041/2021

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al borrador de Orden por la que se determinan las escuelas facultadas para impartir la formación y especialización y el órgano competente para expedir los permisos de conducción de vehículos policiales, la autorización para su conducción por personal ajeno a la policía nacional, y la autorización especial para conducirlos cuando transporten mercancías peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el artículo 57.1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cúpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse, a tenor de lo dispuesto en las normas que se acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

La Orden que se informa se dicta en desarrollo del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, *en cuyo artículo 2* -como una excepción en cuanto a la competencia para expedir los permisos y las licencias de conducción-, *se contempla* la relativa a la expedición de dichos permisos en el ámbito de la conducción de vehículos de las Fuerzas Armadas o de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

En la exposición de motivos y en el articulado del proyecto normativo, se expone la necesidad de *derogar* la *Orden INT/161/2011, de 21 de enero de 2011*, y la sustitución del actual formato en cartulina de la autorización especial para conducir vehículos policiales cuando transporten mercancías peligrosas y de la autorización para la conducción de vehículos propiedad de la Dirección General de la Policía para personal ajeno a dicho cuerpo por otro formato que ofrece mayores garantías de seguridad.

La Orden se refiere a la desaparición del permiso BTP de la normativa que regula los permisos de conducción de vehículos policiales de la Dirección General de la Policía, en consonancia con el Reglamento General de Conductores, incorporando así las consideraciones planteadas en el dictamen motivado de 26 de febrero de 2015 dirigido al Reino de España en el procedimiento de infracción nº 2014/2123, por no haber transpuesto correctamente la Directiva 2006/126-CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción.

La otra principal novedad de la Orden es la sustitución del actual formato en cartulina de la autorización especial para conducir vehículos policiales cuando transporten mercancías peligrosas, y la modificación del formato de la autorización para la conducción de vehículos propiedad de la Dirección General de la Policía para personal ajeno a la Institución. En ambos casos, los correspondientes permisos serán sustituidos por un formato en tarjeta de plástico, al objeto de ofrecer mayores garantías de seguridad contra la falsificación y menor exposición al deterioro por el uso.

El proyecto normativo que se informa consta de una exposición de motivos y una parte dispositiva conformada por su articulado -con un total de seis artículos-, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos.

En el presente caso, la ***Dirección General de la Policía*** es el órgano competente para declarar la aptitud y para expedir -en favor del personal en activo que integra la Policía Nacional-, el permiso de conducción de vehículos policiales y la autorización especial para conducir esos vehículos cuando transporten mercancías peligrosas, canjeables por sus equivalentes, conforme se establece en el **artículo 73** del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo -**RGC**-.

II

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos -**RGPD**-), define los datos personales como “: *toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona*”.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la “Definición” del punto 2 del propio artículo 4 del RGPD, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de “*cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción*”. Por su parte, la definición de “fichero” se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a “*todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica*”.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. -*Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94-*, establecen que: “*Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.*”

Pues bien, según se extrae del texto normativo que se informa -de acuerdo con lo previsto en los *artículos 3, 4 y 5 del proyecto de Orden-*, por parte del órgano competente -Dirección General de la Policía- se procederá al tratamiento de datos de carácter personal, que serán incorporados -respectivamente- al “Modelo de permiso de conducción”, al “Modelo de autorización especial para conducir vehículos policiales que transporten mercancías peligrosas”, y al “Modelo de Autorización para conducir vehículos propiedad de la Dirección General de Policía, para personal ajeno a la misma”, cuyo detalle se determina en los Anexos I, II y III de la Orden.

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (la negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Tal y como se ha expuesto, conforme establece el **artículo 73** del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo **-RGC-**, la **Dirección General de la Policía** es el órgano competente para declarar la aptitud y para expedir al personal en activo que integra la Policía Nacional, el permiso de conducción de vehículos policiales y la autorización especial para conducir esos vehículos cuando transporten mercancías peligrosas, canjeables por sus equivalentes.

Esta previsión reglamentaria se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el **artículo 5, letras a) y b)**, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial **-LSV-**, que atribuyen al Ministerio del Interior: a) la expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los requisitos sobre conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se determinen reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos, y b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de conducción y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidos en el ámbito militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la renovación de los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.

III

En relación con la protección de los datos de las personas afectadas, los efectos prácticos de la norma que se informa se concretan en la recogida y tratamiento de diversos tipos de datos de carácter personal de dichos afectados.

Las actuaciones contempladas en el proyecto de Orden -y especialmente la identificación de los usuarios afectados, habilitados para la conducción de los vehículos de que se trata y el registro de sus datos personales a los efectos previstos en la norma habilitante-, implicarán necesariamente tratamientos de los datos de carácter personal referidos en los *Anexos I, II y III* del proyecto de Orden.

Dicha previsión debe cohesionarse con los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que aquí interesan, **las letras b) c) y d)** del mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refieren a los **principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud**:

“5.1 Los datos personales serán:
(...)”

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación

científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («**limitación de la finalidad**»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («**minimización** de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («**exactitud**»);”

Pues bien, según se observa, las referidas previsiones se respetan plenamente en la orden que se informa, quedando *debidamente plasmadas* sus exigencias en razón de la tipología de los datos personales recabados y tratados en los **Anexos I, II y III**, en tanto resultan limitados a la finalidad prevista, deviniendo adecuados, pertinentes y limitados a dichos fines, y comprendiendo la debida actualización y exactitud de los mismos en función de las diversas circunstancias contempladas en la Orden, y, por tanto, resultando *plenamente conformes con las previsiones del artículo 5 del RGPD*.

Por lo demás, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 - Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico – del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la “Ley de Seguridad Vial”, el Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo 5 de dicha norma a través del organismo autónomo **Jefatura Central de Tráfico**. En este contexto se incardina la previsión del artículo 6 del proyecto de Orden, referido a la “Inspección de Escuelas”, en el que se señala que *“El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y su organización periférica, previa la correspondiente autorización de la persona titular de su dirección, podrá inspeccionar las Escuelas a las que se refiere el artículo 2 con el fin de comprobar si los medios, programas, objetivos y métodos empleados son adecuados para la enseñanza de la conducción y si las pruebas de aptitud se realizan conforme a lo dispuesto en la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.”*

Así, es en el ámbito propio de sus funciones -establecidas por su normativa reguladora sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial-, en el que la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior, desarrolla su labor inspectora en relación con las Escuelas de formación de conductores previstas en la Orden, pudiendo acceder, de tal modo, a los datos de carácter personal de los afectados.

Finalmente, en el proyecto de Orden se echa en falta una referencia expresa a la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, por lo que **deberá incorporarse dicha previsión**, incorporándose un artículo concreto que se refiera expresamente al respeto y observancia de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.